

El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.

EL MIEDO A LAS REFORMAS QUE GENERAN COSTO POLÍTICO

Las joyas del presidente



ROBERTO Abusada Salah

Presidente del Instituto Peruano de Economía (IPE)

Los innumerables debates sobre la necesidad de emprender las grandes reformas para elevar el potencial de crecimiento de la economía, mejorar su productividad, generar empleos dignos y convergencia al desarrollo no parecen estar llegando a ninguna parte. Al parecer, el gobierno está tratando la enorme popularidad del presidente Martín Vizcarra como una joya para exhibir, cuidar y disfrutar. La idea de convertirla en un recurso que se pueda invertir en hacer urgentes reformas parece estar vedada. Los titulares de los sectores Trabajo, Vivienda, Economía y Energía y Minas evitan mencionar cualquier tema de reforma que pueda generar la más mínima oposición. Sería injusto achacarles ignorancia respecto de lo que se requiere hacer. Una y otra vez compruebo que existe, entre varios ministros, altos funcionarios de gobierno y aun entre congresistas, una plena conciencia de la urgencia de las reformas. Pero esa conciencia se desvanece ante el consabido mantra de que “el costo político sería muy alto”.

Creo que la razón fundamental de esta situación es la inconsciente e insensata negativa a comparar el costo político con los beneficios del liderazgo y la acción. Si existiese la voluntad de contemplar (y explicar) los beneficios que acarrearían la creación de cientos de miles de empleos, el bienestar de tener vivienda, transporte, agua y saneamiento, sentir la satisfacción de haber evitado la muerte inútil de miles de niños, ver a estudiantes educándose cabalmente para un futuro mejor o a ancianos viviendo con un mínimo de dignidad, ese costo político se asumiría con entusiasmo. Desafortunadamente, el costo político aterra y paraliza solo cuando se lo equipara con una posible pérdida de popularidad en las encuestas del próximo mes.

La historia reciente nos enseña que no todo está perdido. Hoy los fundamentos macroeconómicos del país son más sólidos que nunca y esto se traduce en beneficios palpables que los ciudadanos aprecian plenamente.

te. Cuando algunos de nosotros trabajamos en el pasado por lograr esta solidez, era frecuente escuchar las mismas razones que entonces hubiesen justificado la misma inacción. Pero esas resistencias se vencieron poco a poco, y el país avanzó un cuarto de siglo sin inflación, sin colas, con electricidad, teléfonos, mejores caminos, más competencia, con crédito internacional y con la tercera parte de pobres que los que vivían anteriormente.

Pues bien, aceptemos que las restricciones políticas de hoy son las que son. Aun así, ello no debería impedir que se trabaje al menos en los márgenes de las reformas imprescindibles invirtiendo algo del capital político acumulado en tareas menos complejas que una reforma laboral completa, el impulso decidido a la infraestructura o el rediseño del sistema de salud o de pensiones. Resolvamos al menos parcialmente algunas cosas, como, por ejemplo, la errónea interpretación de la Constitución que ha convertido la política laboral en una farsa. Declaremos en emergencia la reconstrucción del norte, donde después de casi dos años solo se han completado y entregado obras por el 5% del presupuesto original (S/25.655 millones). Pongamos a cargo de todo el proceso a una empresa de ingeniería de clase mundial. No usemos la coartada de la “declaración de emergencia de Sedapal” para que nada cambie en esta empresa que pierde 30% del agua que produce y donde las roturas de troncales y otras tuberías son cosa de todos los días. Empecemos, por ejemplo, por cambiar unos pocos artículos de la Ley de Recursos Hídricos (29338) para permitir que el sector privado que genere agua nueva, sea por desalinización o con infraestructura para captar excedentes en épocas de avenida de ríos, pueda venderla libremente. Autoricemos la construcción de la mina de Tía María.

Facilitemos la multiplicación de los programas de vivienda social donde existe un déficit de 400 mil viviendas. Allí es fácil ver que el problema no está en la falta de recursos para edificar o en la inexistencia de demanda. El sector privado está posibilitado para cubrir ese déficit, y la cuota mensual de adquisición estaría al alcance de una enorme proporción de potenciales compradores. El problema radica en la incapacidad del Estado para proveer agua y saneamiento, y hacerlo en terrenos planos. Pocos saben que solo en Lima existen 2,8 millones de habitantes que viven en las laderas de los cerros. En algunos casos, la

pendiente de esas laderas entrañan el peligro de una catástrofe mayúscula en la eventualidad de un sismo importante. Terrenos existen pero no se pueden utilizar por falta de agua y saneamiento, o porque pertenecen al Ejército, o por conflictos banales entre autoridades municipales y ministeriales.

Si no empezamos a frenar el miedo al costo político, muy pronto lamentaremos no solo la pérdida de la joya de la popularidad. Lamentaremos haber caído en la famosa ‘trampa de los ingresos medios’ sin haber alcanzado siquiera esos ingresos medios. —



“El costo político aterra y paraliza solo cuando se lo equipara con una posible pérdida de popularidad en las encuestas del próximo mes”.

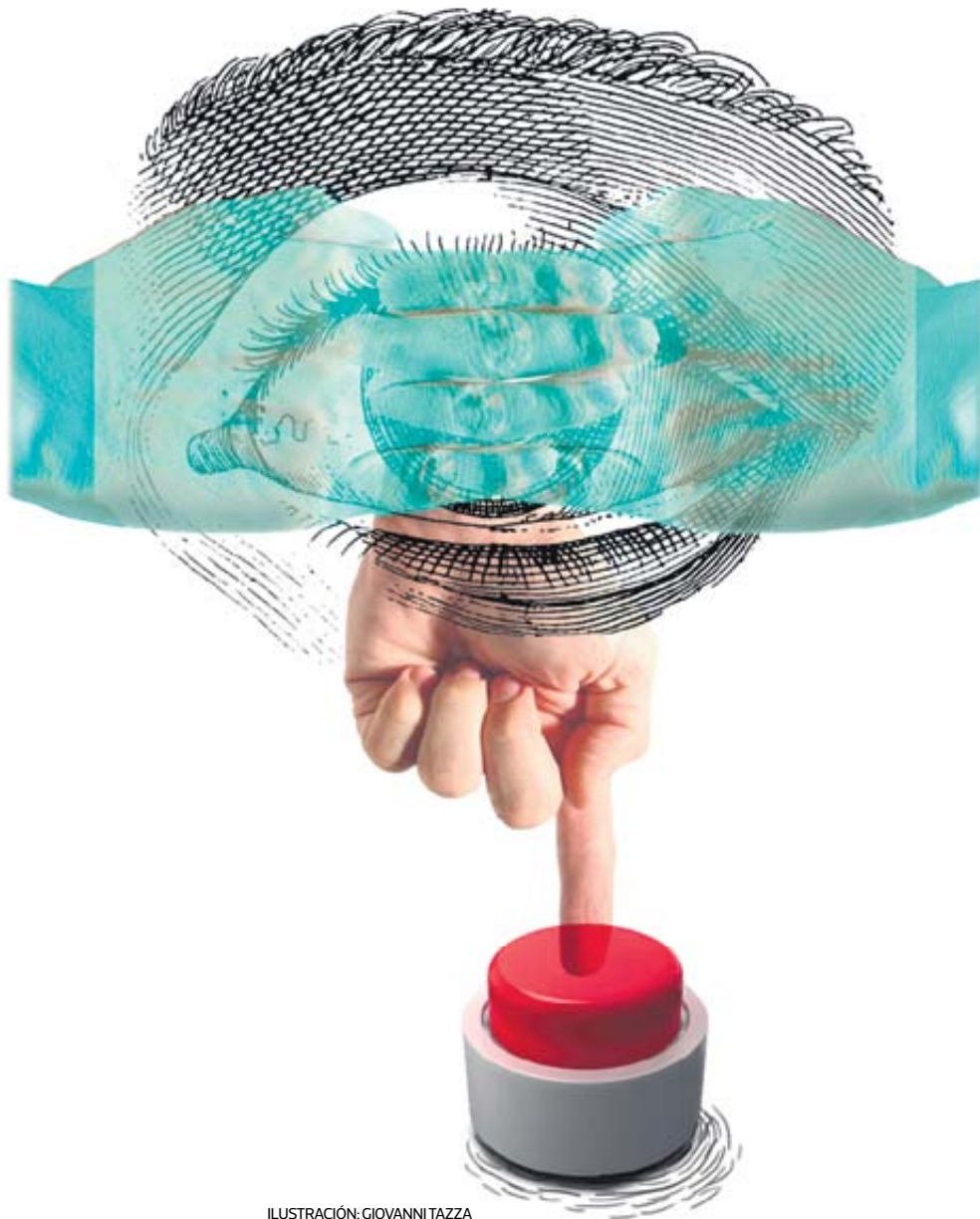


ILUSTRACIÓN: GIOVANNI TAZZA

EL SISTEMA DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS

La fragilidad del zócalo partidario



FERNANDO Tuesta Soldevilla

Profesor Ciencia Política de la PUCP*

A nivel global el sistema de partidos peruano ha sufrido una modificación en su capacidad de integración representativa en dos niveles. Uno horizontal, cuando nuevos partidos, aquellos que se formaron posdesplome del sistema de partidos a finales de la década del ochenta, desplazaron a los llamados partidos tradicionales. Otro vertical, aquel espacio que se configura y diferencia de ambos partidos a nivel subnacional, donde se han construido las organizaciones regionales. Es como si se tratara de desplazamientos de placas submarinas, que al deslizarse produjeron movimientos telúricos en la superficie. La inestabilidad y la fragilidad de nuestro suelo

partidario son, pues, altísimas.

Los nuevos partidos emergentes desplazaron a los partidos de tradición histórica, triunfando en elecciones a la presidencia y la alcaldía limeña. Sin embargo, en conjunto, los partidos históricos y emergentes de carácter nacional iban perdiendo elecciones a nivel subnacional, donde nuevas organizaciones se hacían del poder en gobiernos regionales y locales. Esto creó una clara separación de la representación política en un proceso de desnacionalización, produciéndose dos sistemas de partidos que conviven de manera negativa, impactando seriamente en el conjunto del sistema político.

El resultado ha sido un mayor proceso de fraccionamiento partidario y un serio problema para la articulación de la representación política. De la misma manera, significó la profundización de los males del sistema partidista: debilidad representativa, extendido fraccionamiento y bajo nivel organizativo y cohesión de los partidos. En consecuencia, en el contexto posdesplome del sistema partidista, los partidos desafiantes no fueron una al-

ternativa para recomponer institucionalmente un sistema de partidos, sino que acentuaron su debilidad y permitieron la presencia de un sinnúmero de partidos subnacionales que, a su vez, fraccionan aun más el sistema partidario en su conjunto. Una de las consecuencias de esta debilitada o nula integración y fortalecimiento del poder de líderes y jefes locales ha sido el creciente y acentuado proceso de corrupción a nivel subnacional, más complejo de combatir, pues su diversificación es alta y su capacidad de mutar es mayor.

En concreto, los partidos políticos se fueron restringiendo a la capital, convirtiéndose en mayoritariamente limeños y, en consecuencia, menos capaces de integrar el conjunto de las demandas de la sociedad peruana. En paralelo, las organizaciones regionales se reducen a listas de candidatos. Son más electorales y menos organizaciones partidarias, esto como consecuencia de la hiperconcentración del poder en una sola persona, que es el líder, cuando no el dueño del partido. Estas organizaciones regionales registran una vida efímera, desarrollan un alto personalismo en

la organización, no practican niveles mínimos de democracia interna que tanto exigen a las nacionales y el financiamiento de las campañas electorales recae en fuentes privadas, en muchos casos, de origen delictivo.

Esa alta rotación, dispersión y falta de vínculos partidarios hace que los gobernadores constituyan una caja de sorpresas, donde la mayoría tienen el color político del pragmatismo. Con bajos controles estatales y sin reelección, nada asegura, por ejemplo, que se pueda encontrar, nuevamente, figuras iguales o peores que las anteriores y que transiten de la página política a la policial.

Este panorama de representación partidaria dibuja un país escindido y fraccionado, que mantiene un campo fértil para el desarrollo informal e ilegal de la política institucional. Situación que se notaba menos en un país con crecimiento económico. Pero ahora que la marea ha bajado, se podrá percibir cuánto desperdicio había debajo. —

* El autor es presidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política.